- LLOBEL MUEDRA. *El delito de cheque en descubierto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. v. DERECHO PENAL.
- NAKAMURA. *Les institutions et le mouvement des idées dans la modernisation du Japon*. v. VARIOS.
- PONSARD. *L'obligation alimentaire en droit français*. v. DERECHO CIVIL.
- ROUAST. *De l'intervention des pouvoirs publics...* v. DERECHO DEL TRABAJO.
- SEIDMAN. *Constitutions in Independent, Anglophonic, Sub-Saharan Africa: Form and Legitimacy*. v. DERECHO CONSTITUCIONAL.
- SIEDLECKI. *Les conflits d'attribution entre les tribunaux...* v. DERECHO PROCESAL.
- VLACHOS. *Aspects juridiques de l'intervention économique de l'état aux États-Unis*. v. DERECHO ADMINISTRATIVO.
- VOGEL. *La tutela jurídica frente al poder público en la República Federal de Alemania*. v. DERECHO PROCESAL.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL ESTADO

- FAVOREU, Louis. *Le régime constitutionnel et politique de l'île Maurice*. "Revue Juridique et Politique", núm. 3, julio-septiembre, 1969, año XXIII, pp. 305-318. París, Francia.

El 12 de marzo de 1968, la Isla Mauricio, colonia británica a partir de 1810, accedió a la independencia. La Constitución de 4 de marzo de 1968 establece un sistema político original: la isla es una monarquía cuya soberana es la reina de Inglaterra, representada por un Gobernador General. Se trata de un régimen parlamentario de tipo británico, fenómeno poco común en una pequeña isla perdida en el Océano Índico. El alto nivel de evolución política del país explica que semejante régimen se haya implantado con éxito.

En la primera parte del artículo, el autor recuerda la historia constitucional de la isla, posesión holandesa (1598-1710), luego francesa (1710-1810) y, finalmente, inglesa. En 1948, la administración británica promovió la evolución hacia la independencia en varias etapas, al instaurar un régimen semi-autónomo y autónomo (Constituciones de 1948, 1958, 1964 y 1966).

En la segunda parte del artículo, examínanse las instituciones que establece la Constitución vigente.

El Gobernador General, nombrado por la reina, representa a la soberana y ejerce en su nombre el poder ejecutivo. En la mayor parte de los casos, es preciso que obtenga el acuerdo del Primer Ministro para actuar; en otros, dispone de poderes propios para tomar las medidas necesarias al funcionamiento

satisfactorio del régimen. Esquemáticamente, desempeña el papel de un jefe de Estado parlamentario.

El Gabinete, está integrado por el Primer Ministro y trece ministros, a lo sumo. El Gobernador designa como *Premier* al *leader* del partido mayoritario en la Asamblea y nombra a los demás a propuesta del mismo. Teóricamente, el Gabinete "aconseja al Gobernador" (art. 61, párr. 2), pero en realidad, aquél es quien gobierna; en contraparte y clásicamente, no existe reponsabilidad política del Gobernador ante la Asamblea (art. 61, párr. 2).

El Parlamento, integrado por "Su Majestad y una Asamblea legislativa" (art. 31, párr. 19), consta de 70 miembros; 62 diputados son elegidos mediante sufragio universal directo, mientras los 8 escaños restantes se atribuyen proporcionalmente para restablecer el equilibrio de representación entre las 2 comunidades de la isla (descendientes de europeos y de poblaciones originarias de la India). El Parlamento vota la ley, adopta el presupuesto, controla y fiscaliza al gobierno y tiene facultad para reformar la Constitución. Cabe subrayar el papel oficial atribuido, en el seno de la Asamblea, a la oposición: está encabezada por un *leader*, personaje oficial, a quien la Constitución atribuye estatuto y prerrogativas que enumera expresamente (art. 73).

La Suprema Corte es, a la vez, jurisdicción suprema del orden judicial, alto tribunal electoral (elecciones legislativas) y juez de la constitucionalidad de las leyes. El Gobernador General es quien nombra al presidente (Chief Justice) previa consulta con el Primer Ministro, al vicepresidente (Senior Puisne Judge) con acuerdo del presidente, y a los demás jueces con acuerdo de la Comisión del Servicio Judicial y Legal.—Moniques LIONS.

FRANCESSAKIS, Ph. *Remarques critiques sur le rôle de la Constitution dans le conflit entre le traité et la loi interne devant les tribunaux judiciaires*. "Revue Critique de Droit International Privé", tomo LVIII, 1969, núm. 3, julio-septiembre, pp. 425-446. París, Francia.

En los últimos años algunas decisiones provenientes del juzgamiento de fondo, justifican la aplicación en determinado sentido de los tratados internacionales, apoyadas en los textos constitucionales. Han llegado a declarar y entender que los tratados diplomáticos tienen una autoridad superior a la de las leyes internas y de ahí sacan varias consecuencias. La corriente, o la "serie", remonta probablemente a una decisión de la Corte d'Aix de 10 de noviembre de 1947, y por la fuerza de la ley de la imitación se ha contemplado una notable expansión que lleva a la invocación del texto constitucional como una tendencia ritual. La cuestión consiste, por tanto, en saber si el sentimiento debe servir para restar fuerza a las relaciones internacionales. Debe advertirse que las cortes y los tribunales que dan primacía al principio constitucional lo fundan en realidad en dos fines distintos. Tanto se invoca la esfera de aplicación de un tratado, como el conflicto entre éste y la ley interna. Esta distinción permite señalar que, en el primer caso, no es pertinente emplear tal argumento que puede estar lleno de errores, pues si los tratados son, en efecto, superiores a la

ley, también los hay inferiores y su esfera de aplicación debe, por tanto, deducirse de sus propias estipulaciones.

En otro sentido, es posible observarse una corriente jurisprudencial que indaga sobre la realidad y oportunidad del principio mismo, mediante la cual se puede afirmar que no es seguro que la Constitución entienda dar superioridad a los tratados sobre las leyes internas, principio que se destinaría al juez para imponerle decidir en este sentido un conflicto entre ambos. La tesis de la Corte de casación, tradicional y mantenida a pesar de los cambios constitucionales, es que no hay jerarquía entre tratado y ley. Al suponer la existencia del principio de la superioridad se hace difícil la solución de un conflicto de esta naturaleza y, por ello, la cuarta consecuencia, extrema, sería que la prevalencia de la ley interna nueva sobre el tratado anterior no debería inspirar grandes temores. En aplicación del principio de que la ley posterior deroga la anterior, es menester suponer que una regla semejante se aplica en materia de constitucionalidad, pero esto pone de relieve que, en realidad, hace falta al juez la suficiente materia de conocimiento que le permita juzgar adecuadamente. La hipotética negativa voluntaria del legislador, en cuanto a las obligaciones internacionales de Francia, podría fundarse sobre la teoría de los tratados que, en el plan de la responsabilidad internacional y el caso del sometimiento a una instancia internacional, no sería, a fin de cuentas, una violación. El juez deberá, entonces, poder presumir explicaciones semejantes a las de la tesis de la imprevisión del legislador interno, para no apartarse de su habitual sumisión a la ley. Pero no debe olvidarse que se está en casos hipotéticos, porque actualmente se está ante el fenómeno de igualdad del tratado y la ley interna.—Humberto BRISEÑO SIERRA.

FROMONT, Michel. *L'évolution du droit public allemand en 1968. Les réformes universitaires en Allemagne et leur constitutionnalité*. "Revue du Droit Public et de la Science Politique", núm. 4, julio-agosto, 1969, pp. 621-639. París, Francia.

Bajo la presión de los movimientos estudiantiles de izquierda, las legislaturas de los diversos *Länder* de la República Federal de Alemania se han visto en la tesitura de incorporar en sus cuerpos jurídicos algunas reformas relativas a la organización y funcionamiento de las universidades, introduciendo básicamente el principio de la "cogestión" o "codeterminación" por los estudiantes. La cuestión jurídica central que estas reformas plantean es la pertinente a la compatibilidad de las mismas con el artículo 5º de la Constitución Federal, que consagra la libertad de enseñanza y de investigación.

El autor de este interesante trabajo, profesor actual en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Dijon (Francia), nos presenta una breve caracterización del mencionado problema, a través de una revisión de la literatura más reciente de los especialistas germanos sobre el tema, el cual ha sido objeto de preocupación a todos los niveles dentro del panorama educacional superior de Alemania, motivando en los últimos años diversas reuniones científicas, tales como el Congreso de Profesores Alemanes de Derecho Público, en Bochum (Ruhr), el 4 de octubre de 1968.

El trabajo de Fromont abarca, pues, dos grandes secciones: una crónica

sobre las reformas universitarias en Alemania y un análisis del problema de su constitucionalidad. En la primera parte, nos ofrece un paisaje somero, aunque esencial, de la coyuntura social, política y económica que ha auspiciado la crisis actual de las universidades alemanas, poniendo en jaque la concepción tradicional sobre éstas como centros de enseñanza e investigación que las convirtió, hasta muy recientemente (después de 1945), en verdaderas "repúblicas de sabios". Sin embargo, las transformaciones sociales en volumen y rapidez a que se ha visto sometida la educación superior, a escala mundial, ha favorecido la crisis de fundamentos de la universidad tradicional, por la invasión masiva de sus recintos por la gran población estudiantil, con las secuelas inevitables del descenso en el nivel académico, la desaparición del diálogo socrático entre profesor y alumno y la llamada "escolarización de la universidad", que la ha venido a convertir en centro de capacitación profesional, acabando con la típica unidad esencial entre enseñanza e investigación.

Este panorama crítico ha propiciado la "protesta estudiantil" de los últimos años, surgida en Berlín entre 1965 y 1967, inicialmente con reivindicaciones puramente académicas que, en junio de 1968, se vieron desvirtuadas por demandas extrauniversitarias, y ante cuyo fracaso (los sucesos de Francia en mayo y la reforma constitucional sobre el estado de crisis) han vuelto de nuevo por la senda originaria, ahora con la bandera de la "cogestión", que al fin ha provocado las reformas cuya constitucionalidad discute el profesor Fromont en este artículo, a través de tres interrogantes: ¿es incompatible en Alemania la libertad de enseñanza e investigación, consagrada constitucionalmente, con el principio de la "cogestión"?, ¿justifican el principio democrático y la libertad de aprendizaje la introducción de esa "cogestión"?, ¿es la cuestión de su compatibilidad un problema jurídico o político?.—Fausto E. RODRÍGUEZ.

GAUTRON, Jean-Claude. *La révision constitutionnelle du 20 juin 1967 au Sénégal*. "Revue Sénégalaise de Droit", núm. 2, diciembre de 1967, pp. 5-21. Dakar, Senegal.

Como todas las Constituciones africanas posteriores a 1958, la Constitución senegalesa de 7 de marzo de 1963 está inspirada directamente en la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958.

Instituye un régimen mixto: presidencialismo y parlamentarismo racionalizado; esto es, técnicas y procedimientos tendientes a establecer una colaboración de los poderes en la que el Ejecutivo desempeña el papel dominante, frente a un Legislativo debilitado. En efecto, el presidente goza de prerrogativas que no figuran entre las atribuciones del Ejecutivo de tipo presidencial; entre éstas, notemos la facultad de someter a referéndum todo proyecto de ley, sea cual fuere su objeto (lo que le permite prescindir de la intervención del Parlamento y, luego, descartar de antemano discusiones y enmiendas eventuales). Por otra parte, a ejemplo del artículo 16 de la Constitución francesa, el artículo 47 senegalés confiere al presidente el ejercicio de poderes excepcionales, en determinados casos.

La reforma constitucional de 20 de junio de 1967 obedece a dos tendencias que, a primera vista, parecen contradecirse: 1) por un lado, acentúa los rasgos dominantes del régimen, al reforzar la situación del presidente frente

a la Asamblea cuyo papel restringe en varios dominios; 2) por el otro, tiende a orientar el régimen hacia un principio de clima más liberal y democrático, y, al limitar los efectos de la primera tendencia, reviste importancia.

I. Afirmación del predominio del Ejecutivo

En primer lugar, la duración del mandato presidencial resulta más larga: el artículo 22 la fija a 5 años (antes, 4). En segundo lugar, dispone del derecho de disolución en contra de la Asamblea; esta prerrogativa es fundamentalmente contraria a la ortodoxia del presidencialismo, pues es específica del régimen parlamentario, en el que representa la contraparte de la facultad que tiene el Parlamento de obligar al gobierno o al Gabinete a dimitir. Sin embargo, con la reforma al artículo 75 bis, y pese a que quede criticable en su principio, la reglamentación del derecho de disolución establece límites al ejercicio del mismo.

II. La liberalización del régimen

Quizá parezca paradójico evocar una "liberalización" del régimen en un país en que impera el sistema del partido dominante. Sin embargo, la reforma de 1967 asienta reglas de esencia democrática y liberal, susceptibles de promover una relativa democratización.

La primera concierne a la campaña electoral para las elecciones presidenciales (art. 24, párr. 2); corrige una anomalía preocupante que, por mecanismos indirectos, impedía la representación de la oposición en la Asamblea. La segunda es relativa a los poderes excepcionales del presidente (art. 47): establece limitaciones apreciables a su ejercicio, en comparación con lo estipulado por el artículo 16 francés. La tercera (art. 88), en fin, otorga mayores atribuciones al Consejo Económico y Social, órgano representativo, cuyo fin es asegurar la participación de las principales categorías profesionales y grupos socioeconómicos en la determinación de la política económica.—Monique LIONS.

GROS ESPIELL, Héctor. *Los partidos políticos en la Constitución uruguaya*. "Revista de Estudios Políticos", núm. 164, marzo-abril de 1969, pp. 139-165. Madrid, España.

El distinguido constitucionalista uruguayo analiza uno de los problemas que mayor atención ha despertado entre los juristas contemporáneos, pero que hasta hace poco tiempo sólo había sido cultivado por sociólogos y estudiosos de la ciencia política.

A través de un panorama bastante completo, el profesor Gros Espiell analiza todos aquellos preceptos de la carta fundamental vigente de 1967 así como sus antecedentes en las Constituciones anteriores de 1918, 1934, 1942 y 1952 que tienen relación o regulan directamente a los partidos políticos, con referencia a las leyes ordinarias que reglamentan los mismos preceptos, destacando una serie de problemas de gran actualidad tanto en la vida política del Uru-

guay, como en otros países en los cuales se ha presentado esta preocupación de incluir en los textos fundamentales disposiciones relativas a los propios partidos.

Al respecto puede señalarse —entre otras cuestiones— la declaración, a través de una ley secundaria, de la ilicitud de los partidos políticos cuando por medio de la violencia o de propaganda que incite a la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad, en los términos de los artículos 39 y 89, numeral 6, de la ley suprema; y la relativa a la libertad para el ingreso y afiliación de todos los ciudadanos a los diversos partidos políticos, que se desprende de los artículos 77, numerales 4 y 5, 58, 29 y 39 de la misma carta fundamental, en la inteligencia de que el mismo principio de libertad implica el reconocimiento de que nadie puede ser obligado a afiliarse, integrar, adherirse o actuar en un partido político, ya que la libertad de asociación supone necesariamente, en un sistema democrático, el derecho a no asociarse.

Existen otras disposiciones que se refieren o suponen expresamente la existencia o actuación de los partidos políticos en el Uruguay, pero es el numeral 11 del artículo 77, introducido en la carta vigente de 1967, el que debe señalarse como un verdadero progreso en relación con las Constituciones anteriores, ya que significa el establecimiento de un texto concreto destinado a determinar las bases del estatuto jurídico de los partidos políticos uruguayos.

En este sentido, son tres las disposiciones incluidas en dicho precepto, la primera de las cuales establece que: "El Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad", lo que no constituye sino la reiteración de una verdad ya existente en el sistema constitucional del Uruguay, pero que tiene la virtud de precisar, con indudable claridad, la aplicación del principio general de la libertad, con la consecuencia de que no cabrán discusiones al respecto y de que sólo en virtud de una norma constitucional expresa podrán admitirse restricciones a la libertad de constitución, acción, demonización e ideología de los partidos y de afiliación e integración respecto de ellos.

El precepto mencionado impone también a los partidos políticos la obligación de "ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades", lo que implica el deber inmediato, sin perjuicio de una ley reglamentaria posterior, de que los partidos tengan autoridades electivas, que el mandato de éstas sea por un término razonable, que el acto electoral sea libre y que esté sujeto a un efectivo contralor; todo lo cual no debe confundirse con la diversa exigencia de que los partidos tengan una ideología democrática, ya que sólo es posible exigir al partido político que no trate, mediante la violencia o la propaganda que incite a la violencia, de destruir las bases esenciales de la nacionalidad.

En tercer lugar, el referido precepto obliga a los partidos políticos a "dar la máxima publicidad a sus cartas orgánicas y programas de principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlas ampliamente".

Este excelente trabajo del profesor Gross Espiell, como los suyos anteriores sobre esta materia, debe estimarse como de consulta obligada para todos aquellos a quienes preocupa la estructura jurídica de los partidos políticos en Latinoamérica.—Héctor FIX-ZAMUDIO.

HRISTOV, Aleksandar T. *La protection constitutionnelle des droits personnels et collectifs*. "Journées Juridiques", Centre français du droit comparée. Sixièmes Journées Juridiques Franco-Yougoslaves. (Skopje-Titograd-Sarajevo, 11-20 mayo, 1962), 1968, pp. 249-270. París, Francia.

El profesor de la Universidad de Skopje examina en este artículo la protección de los derechos individuales y colectivos en Yugoslavia antes de la promulgación de la Constitución Federal de 1963; pero afortunadamente agrega un apéndice con comentarios a las reformas contenidas en esta última, sobre todo en virtud de la creación de la Corte Constitucional y de los procedimientos legales ante ésta.

Su exposición versa sobre los derechos del individuo frente a la comunidad, la República (Estado) y la Federación ante esta Corte Constitucional, protección que se hace respecto a toda clase de derechos individuales, incluso de carácter político: derecho a la autogestión social, derecho al sufragio, derecho al trabajo y a la libertad en el trabajo, a la inviolabilidad del domicilio, etcétera. O sea que estos derechos individuales son muy amplios; lo mismo sociales que económicos o políticos, al igual que los derechos de tradición liberal. Estos derechos pueden protegerse mediante recursos ante la Corte Constitucional frente a actos de carácter federal o de las Repúblicas. El derecho a la autogestión, que es para participar en el trabajo en una empresa, es lo mismo un derecho individual que un derecho social y está reglamentado también por una ley sobre el contencioso-administrativo.

Pero existe una serie de derechos colectivos de los ciudadanos dentro de las comunas o municipios, protegidos también por la Corte Constitucional y Cortes Constitucionales, tales como el participar en la formación del presupuesto de la comuna, el referéndum de las leyes, etcétera. Paralelamente, existen derechos colectivos de las organizaciones económicas y de los establecimientos, o sea, derechos no de los individuos sino de colectividades o personas morales, también protegidos ante la Corte Constitucional. De todo esto es muy interesante la exposición que hace el autor, pues se advierte la posibilidad de confrontaciones, en un plano de igualdad, ante la Corte Constitucional, de las agrupaciones obreras con los organismos de trabajo, o sea, de los obreros con las empresas en que laboran. Pero estas confrontaciones y las posibilidades de que las mismas empresas puedan reclamar actos de las comunas, de las Repúblicas o de la Federación son muy variadas y la Corte Constitucional competente resuelve los conflictos.—Lucio CABRERA.

KATIN. *The Advocate as Lawmaker*. . . v. VARIOS.

KLEIN. *Hugo L. Black: A Judicial View*. . . v. VARIOS.

KUSEJ. *Le contrôle du self-gouvernement local en Yougoslavie*. . . v. DERECHO ADMINISTRATIVO.

LARSON. *The New Law of Race Relations*. v. VARIOS.

LETOURNEUR. *Le contrôle et les garanties de l'autonomie locale en France.* v. DERECHO ADMINISTRATIVO.

MARAIST. *Proposed discipline for a procedural problem child...* v. DERECHO PROCESAL.

MORREALE. *Obscenity: An Analysis and Statutory Proposal.* v. VARIOS.

RENAULD, J. *Réflexions sur la nature de droits de l'homme.* "Revue de Droit International et de Droit Comparé", año XLV, núms. 3-4, 1968, pp. 149-166. Bruselas, Bélgica.

El reconocimiento actual de los derechos del hombre en los instrumentos internacionales coloca al jurista ante situaciones que antes no confrontaba respecto de su naturaleza. De una parte está el interés científico de definir su estructura y clasificarlos según las categorías que les convienen. Otros son los puntos de vista del jurista que, por vocación, busca la determinación lógica de la estructura de los conceptos y la noción que utilizan el legislador o los organismos internacionales que normalmente se sitúan en un plano de actuación concreta y toman en consideración, sobre todo, los fines prácticos. Pero de cualquiera manera, ello no excluye que el jurista ensaye la construcción de la institución para situarla dentro de las coordenadas de que dispone. Cuando se pregunta qué son en verdad los derechos del hombre se inquiere propiamente de derechos y no de facultades o viceversa; esta distinción implica el que las facultades no puedan beneficiarse sino de una protección atenuada por relaciones entre derechos propiamente dichos. Sin duda, es cierto que todo orden jurídico se presenta como un "sistema" que engloba una comunidad determinada y tendiente a reglar de una manera coherente, a través de relaciones, una multitud de puntos de vista válidos para constituir una comunidad. De esta manera, se puede considerar que la estructura lógica de todo orden jurídico se desenvuelve según un modelo centripeto.

Pero de otra parte es notable que, en la unión, esta tendencia haya encontrado su contrapartida y su correctivo en el movimiento de apertura al exterior, que permite a los órdenes jurídicos situarse los unos al lado de los otros, en vista de las relaciones individuales. Se produce un movimiento de ideas complejas que lleva al reconocimiento de los órdenes extraños como un medio semejante de alcanzar soluciones del mismo procedimiento lógico y complementarios los unos de los otros. Al mismo tiempo, el principio de la comunidad sobre el que descansan se pone en peligro y hasta su misma significación. Se observa así un desenvolvimiento correlativo en el seno de los distintos órdenes jurídicos, una dimensión nacional o particularista y otra internacional o universalista. Es que, en definitiva, la función organizadora y pacifista que caracteriza todo orden jurídico no podría realizarse haciendo abstracción de la relación que ocupa cada uno de los derechos individuales. Es la toma de conciencia de esta particularidad la que funda y explica el carácter universal de la declaración, fruto de una reflexión más profunda sobre los tratados fundamentales del orden jurídico, conocido en la estructura lógica

como una totalidad reguladora y pacificadora. El análisis de estos derechos es todavía un trabajo interminable, la reflexión sobre su naturaleza conduce a un análisis más profundo cada vez de los mecanismos fundamentales del pensamiento jurídico, y Renauld no ha tenido otro propósito que el de mostrar su importancia universal.—Humberto BRISEÑO SIERRA.

RUIZ ELDRIDGE, Alberto. *El referéndum*, "Revista Jurídica del Perú", enero-junio de 1969, núm. I-II, pp. 3-5. Lima, Perú.

El autor desea que se introduzcan en Perú las principales prácticas de la democracia directa, como son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa, el veto popular y la revocatoria.

Si bien —afirma Ruiz Eldredge— esas instituciones no se encuentran en la Constitución, ya que ésta asienta los principios de la democracia indirecta, esas instituciones se pueden tolerar y vivificar en el marco constitucional actual.

El argumento jurídico en favor de la afirmación anterior se encuentra en el artículo primero de la ley fundamental del Perú, que declara: *el pueblo es el origen y raíz de la soberanía*. Este precepto es la fuente del referéndum, iniciativa popular, etcétera, en ese país; ya que el pueblo en ejercicio de su soberanía las puede hacer efectivas, las puede introducir en esa nación.

Ahora bien, la principal preocupación de este autor estriba en que no se reforme la Constitución, ni mucho menos sus decisiones fundamentales, si no es a través de plebiscitos, para que sea el pueblo el que efectúe las modificaciones a su norma de normas.

Con mayor razón, en la creación de una Constitución deben participar todos los ciudadanos, haciendo un orden jurídico que garantice la justicia.

Nosotros en México hemos propuesto que se introduzcan en este país los principales procedimientos de la democracia semidirecta,¹ por considerar que es la idea que más se acerca en este siglo al gobierno del pueblo por el pueblo. Sin embargo, pensamos que para introducirlos es necesario que se lleve a cabo una reforma constitucional.

No creemos que sea suficiente nuestro artículo 39 constitucional —la soberanía radica por origen y por esencia en el pueblo— para poder utilizar, sin existir una reforma constitucional, esos métodos que tan caros y tan necesarios nos son: el referéndum y el veto e iniciativa popular.—Jorge CARPIZO.

SCHMITT. *Clausewitz como pensador político o el honor de Prusia*. v. VARIOS.

SEIDMAN, Robert B. *Constitutions in Independent, Anglophonic, Sub-Saharan Africa: Form and Legitimacy*. "Wisconsin Law Review", vol. 1969, núm. 1, pp. 83-127. Madison, Wisconsin, E. U. A.

El profesor Seidman, de la Universidad de Wisconsin, analiza en este trabajo los problemas centrales que, para la subsistencia independiente de los Estados africanos surgidos con la liberación de las colonias británicas, plantea la

¹ *La Constitución Mexicana de 1917*. UNAM, México, 1969, p. 275.

herencia del modelo de gobierno constitucional inglés, el cual, desde luego, resulta por ahora inapropiado a las necesidades de esas nuevas unidades jurídico-políticas del continente negro.

Tales problemas pueden condensarse en las dos exigencias principales de esas frágiles estructuras: *legalidad* y *desarrollo*. Una y otra reclaman la institucionalización de sus órganos gubernamentales mediante la satisfacción de las urgencias vitales de los gobernados, las cuales no pueden ser soslayadas ni sustituidas por meros símbolos normativos que no tengan un apoyo en la realidad socio-vital que pretenden regular. Desde este punto de vista, lo importante es determinar, en primer término, las metas que han de alcanzar estas nuevas entidades políticas. El autor sostiene que deben distinguirse tres aspectos jurídicos en relación con la sociedad africana: el estatutario (*status*), incorporado en el derecho consuetudinario, tradicional; el contractual, derivado de la herencia del derecho inglés; y el administrativo (planificación), relativo al conjunto de normas jurídicas implicadas por el intervencionismo estatal en nombre de las exigencias de igualdad y desarrollo, con las que pugnan, en principio, los dos primeros aspectos señalados.

Seidman estudia en su artículo las implicaciones que, para el derecho constitucional de cada nuevo Estado africano anglofónico, tienen las diversas valoraciones que están en juego en las distintas realidades socio-políticas, sobre la base de que el mejor modelo constitucional para cada unidad estatal será aquel que garantice un pacífico desarrollo del conflicto de los intereses y una reducción racional de las tensiones correspondientes.—Fausto E. RODRÍGUEZ.

THOMPSON, Kirk. *Constitutional Theory and Political Action*. "The Journal of Politics", vol. 31, núm. 3, agosto, 1969, pp. 655-681. Gainesville, Florida, E. U. A.

Señala el autor la ausencia en la moderna teoría constitucional de un concepto adecuado sobre la "acción política", entendida ésta en el sentido de la actividad innovadora del político, así como de una solución al problema de la relación entre orden y libertad. La falla en cuestión la atribuye Thompson a la preocupación de los constitucionalistas en cuatro ideas centrales (sobre: una ciencia formal de la política, la ficción política, el institucionalismo y una política de intereses económicos), todas ellas opuestas a la formulación de un concepto de "acción".

La noción de referencia (acción política) hay que distinguirla de otras dos: el comportamiento político y la ficción política. La acción política, conforme a la opinión de Hannah Arendt, "es el modo en que el hombre se enfrenta a la impredecibilidad y contingencia inherentes al mundo político, y en el que aquél despliega su *areté* y virtuosidad", caracterizándose por cinco notas: innovación, indeterminación, publicidad, consecuencialidad y finalismo. La falta de un concepto adecuado sobre la misma se manifiesta en el énfasis de los constitucionalistas sobre el orden institucional y en su concepción altamente restringida de la libertad, lo cual conduce a la ausencia de una discusión sobre el papel del político, su situación y los problemas que confronta.—Fausto E. RODRÍGUEZ.

VOGEL. *La tutela jurídica frente al poder público en la República Federal de Alemania*. v. DERECHO PROCESAL.

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ARDANT, Philippe. *La pratique diplomatique chinoise récent*. "Revue Générale de Droit International Public", núm. 4, octubre-diciembre, 1968, pp. 991-1041. París, Francia.

Con el título de "La práctica diplomática china" (continental) el profesor de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de Poitiers da una visión completa de la práctica internacional de la China comunista, a partir de 1949.

En la parte introductoria (pp. 993-999) el autor hace notar: que el comportamiento de las autoridades chinas en sus relaciones diplomáticas es, en efecto, difícilmente comprensible en función de las normas y costumbres corrientemente admitidas en la sociedad internacional. Es así, por ejemplo —continúa diciendo el jurista francés—, que los diplomáticos extranjeros en Pekín se encuentran en una situación particular e incómoda; no reciben el tratamiento que les es habitual a los diplomáticos; su calidad no da lugar a consideraciones ni a facilidades, constituye más bien una fuente de problemas, sin que puedan contar con la protección del Estado cerca del cual están acreditados. Éstos y otros detalles para el profesor Ardant denotan la voluntad de no sujetarse a las normas de la vida diplomática afinadas por la práctica internacional. Las relaciones diplomáticas chinas están fundadas en una "concepción original y coherente de las relaciones diplomáticas".

La política china tiende a hacer de su país el centro de las relaciones de China y el exterior, apareciendo como un modelo destinado a substituir a las normas consagradas por la Convención de Viena de 1961. La diplomacia china es así un instrumento al servicio de la revolución mundial y, en consecuencia, no puede obedecer a las mismas normas que la diplomacia occidental o soviética (p. 995).

El análisis de la concepción china de las relaciones diplomáticas se efectúa en dos partes: en la primera parte se ve el Estatuto Diplomático (pp. 1000-1024), presentada en dos secciones: 1) Los diplomáticos (limitaciones a las facilidades de ir y venir en el interior del país, ataques a la inmunidad de jurisdicción, prohibición de abandonar el territorio chino), y 2) Las misiones diplomáticas (edificio de la embajada, anexos y atribuciones de la misión, bandera, automóviles, etcétera). En la segunda parte se examina la actividad diplomática (pp. 1025-1040), en dos secciones también: 1) Las relaciones con las autoridades, y 2) Las relaciones con la población (con los chinos, con los ciudadanos).

El autor concluye (pp. 1041-1042) que un consentimiento tácito en el tratamiento que se les da a los diplomáticos extranjeros caracteriza la actitud de la mayor parte de las embajadas; y que lo positivo es que las continuas violaciones a la práctica diplomática han dejado de ser *casus belli*.—Luis MALPICA DE LAMADRID.